

380

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 17/09/20

AUTO INTERLOCUTORIO No. 222

MAGISTRADA PONENTE: OMAR EDGAR BOJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-002-2018-00246-01.
EJECUTANTE:	LUISA MARÍA GARCÍA SALAMANCA
EJECUTADO:	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCAR

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. ____ del ____.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante, contra el auto nro. 370 del 26 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que dispuso librar mandamiento de pago, pero se abstuvo de librarlo respecto de los intereses moratorios.

II. ANTECEDENTES

La señora Luisa María García Salamanca, a través de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva contra la Rama Judicial Dirección Ejecutiva, en la que solicitó se libre mandamiento ejecutivo a su favor, por concepto de los valores que se derivan de la sentencia del 17 de febrero de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cali, revocada parcialmente por la sentencia nro. 365 del 7 de octubre de 2017, emanada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión Laboral.

Por auto interlocutorio nro. 370 del 26 de marzo de 2019 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santiago de Cali, libro mandamiento de pago contra la Rama Judicial ordenándole en primer lugar, pagar a la demandante las acreencias laborales causadas entre el 2 de abril de 2009 hasta el 2 marzo de 2015; y en segundo lugar, absteniéndose de librar mandamiento de pago por los intereses moratorios.

Inconforme con el auto anterior el ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo resuelto mediante auto interlocutorio nro. 846 del 3 de abril de 2019, que resolvió corregir el numeral primero de la parte resolutive, librando mandamiento de pago en la forma como fue pedido en la demanda.

Nuevamente el ejecutando presentó recurso de apelación contra el auto inicial, el cual fue concedido mediante auto interlocutorio nro. 1873 del 4 de julio de 2019.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 370 del 26 de marzo de 2019¹, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, libró mandamiento parcial de pago, absteniéndose de librarlo respecto de los intereses moratorios, pues a su concepto la indexación concedida incluía tal ítem.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte apelante en síntesis que, si bien la indexación es la forma de actualizar el valor económico de la moneda frente a la pérdida de poder adquisitivo por depreciación, lo cierto es que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, ordenó dar cumplimiento a la misma en los términos del artículo 176 y 177 del CCA, de los cuales el último artículo establece que la sentencia que se ejecuta devengara interés moratorios.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Se debe librar mandamiento de pago por intereses moratorios de conformidad con lo consagrado en el artículo 177 del CCA, tal como fue dispuesto en la sentencia del 17 de febrero de 2012, pese a que ya se libró mandamiento de pago respecto a la indexación de los valores adeudados?

5.2. TESIS

Se revocará la providencia apelada, por las razones expuestas en ésta providencia, toda vez que no se comparte la decisión del a-quo pues es claro que los intereses moratorios y la indexación son dos conceptos diferentes, además de tener en cuenta que la sentencia condenatoria dispuso dar cumplimiento a la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del CCA, lo cual hace parte de la literalidad del título ejecutivo.

En tal razón, puede decirse que la indexación es el procedimiento mediante el cual se trae a valor presente un rubro causado en el pasado, con el fin de evitar su devaluación por el paso del tiempo. Por su parte los intereses moratorios se definen como aquella suma de dinero que debe pagar el deudor a título de indemnización por el incumplimiento total o parcial de la obligación.

Es claro entonces concluir que tales conceptos no pueden ser confundidos en uno mismo, pues fueron creados para satisfacer fenómenos completamente distintos.

Para resolver el precitado problema jurídico, es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca del proceso ejecutivo, además de los conceptos de intereses moratorios e indexación, para luego aplicarlo al caso concreto.

¹ Ver folios 46, a 48



5.3. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

• DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA² establece que son títulos ejecutivos: (i) las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; (iii) el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iv) las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP³ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: (i) un documento que provenga del deudor o de su causante; (ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; (iii) las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y (iv) los demás documentos que expresamente disponga la ley. (Subrayado del Despacho)

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: “*presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal*”.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

Lo cual esta debidamente cumplido en el presente caso, toda vez que fueron allegadas con el escrito inicial copia de la sentencia de primera instancia de fecha 17 de febrero de 2012⁴ proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de

² Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

³ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁴ Ver folios 2 a 14.

Cali, así como copia de la sentencia de segunda instancia de fecha 7 de octubre de 2014⁵ proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión Laboral.

• **LA INDEXACIÓN:**

Sobre la indexación debe indicarse que el artículo 178 del CCA⁶, establece: **“AJUSTE DE VALOR.** *La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.”*

De otra parte, el Consejo de Estado respecto a su finalidad ha indicado que: *“...La indexación sirve como un instrumento equilibrador del fenómeno de la depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del país. El ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye, en forma continua, el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como lo consagra el artículo 230 de la Carta...”*⁷

De lo expuesto, se tiene entonces que la indexación es el procedimiento mediante el cual se trae a valor presente un rubro causado en el pasado, con el fin de evitar su devaluación por el paso del tiempo. Por lo tanto, de conformidad con los principios de equidad y los derechos a la dignidad humana y al trabajo, es procedente indexar las sumas que hayan sido reconocidas.

Por lo tanto, puede decirse que el reajuste que implique la indexación no hace la deuda más onerosa, ya que solo mantiene el valor económico real frente a la progresiva devaluación de la moneda; es decir, la obligación no se modifica, sino que se trae a valor presente el equivalente del valor reconocido, todo por cuanto no es justo que el trabajador reciba un valor devaluado con respecto a lo que tenía el derecho de percibir, pues ello trasladaría el riesgo de la depreciación al trabajador.

• **LOS INTERESES MORATORIOS:**

En cuanto a los intereses moratorios tenemos que el artículo 177 del CCA establece lo siguiente: **“ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS.** *Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.*

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso

⁵ Ver folios 15 a 27.

⁶ Normatividad aplicable para el presente caso Decreto 01 de 1984.

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Providencia del veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00329-01(2284-13) Actor: ALBERTO ARTURO VILLAREAL SALAZAR Y CARLOS IVÁN RIBERO MATEUS Demandado: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.



administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales ~~durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.~~

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presente la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiese llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo..."
(Negrilla y Subraya fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, tenemos que los intereses moratorios se deben a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en texto de la sentencia, pues "operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley"; una conclusión contraria sería en perjuicio del demandante.

5.4. CASO CONCRETO:

De conformidad con el artículo 328 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

En tal sentido, el recurrente sostiene que en el presente caso es procedente ordenar el pago de los intereses moratorio en favor del ejecutante, toda vez que la sentencia de primera instancia ordenó dar cumplimiento a la misma en los términos del artículo 176 y 177 del CCA, último que prevé el reconocimiento de intereses moratorios, por lo tanto, es claro que la indexación se da hasta la ejecutoria de la sentencia y a partir de allí se establece la posibilidad legal de los intereses que fueron negados en el mandamiento.

De conformidad con lo preceptuado, es evidente que a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 177 del CCA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán intereses comerciales y moratorios.

- Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presente la solicitud en legal forma.

En el presente asunto, obra la correspondiente radicación de la solicitud de cumplimiento del fallo judicial objeto de ejecución, radicada por el apoderado de la parte demandante ante la entidad ejecutada, el cual según Resolución nro. 5749 del 8 de septiembre de 2017 se dio cumplimiento parcial a lo condenado en la sentencia de primera instancia liquidando los salarios y prestaciones sociales devengadas por la demandante desde el 2005 hasta el 2009.

Sin embargo, es evidente que tal como lo deduce el a quo, la entidad omitió pagar lo correspondiente a los años 2005 hasta el 2015 fecha en que la demandante fue reintegrada a laborar.

En ese entendido, se aclara que el título ejecutivo establece para la ejecutante indexación desde la fecha en que debió hacerse el pago hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia conforme lo contemplado en el artículo 178 del C.C.A; y los intereses desde el día siguiente a la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago según lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A (Tal como lo dispone el numeral 5 de la sentencia – fl. 13), razón por la cual no existe argumento jurídico para negar la liquidación de intereses de mora, ya que no se están liquidando paralelamente sino cada concepto durante el lapso de tiempo que fue reconocido en el título.

Así entonces, en cumplimiento al numeral 5 de la parte resolutive de la sentencia que presta mérito ejecutivo, las acreencias laborales debidamente indexadas a la ejecutoria de la sentencia y las causadas con posterioridad sin indexar, devengará intereses moratorios a tasa comercial desde el día siguiente a la ejecutoria (febrero 14 de 2015), hasta la fecha en que haga el pago total de la obligación, los cuales se liquidarán a tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo establece el artículo 177 del C.C.A.

En consecuencia, se revocará la providencia apelada para que el juez de acuerdo a los lineamientos trazados proceda a resolver nuevamente sobre el reconocimiento de los intereses causados.

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio No. 370 del 26 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual negó librar mandamiento de pago respecto a los intereses moratorios, de conformidad con la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, resolver nuevamente acerca del mandamiento de pago respecto a los intereses moratorios, teniendo en cuenta los lineamientos normativos y jurisprudenciales expuestos en este proveído.

RADICACIÓN
Medio de control
Ejecutante
Ejecutado

: 2018-00246-01
: EJECUTIVO
: LUIS MARIA GARCÍA SALAMANCA
: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL




7

TERCERO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


OMAR EDGAR BORJA SOTO

Proyecto: Yurani López
VoBo Secretario

17SEP2020PM1:40 T

17SEP2020PM1:41 TAV-1